

1997-06

Las elecciones de 1997 : ¿transición o restauración?

Valencia-Lomelí, Enrique; Marván-Laborde, María; Preciado-Coronado, Jaime; Narro-Monroy, Jorge A.; Román-Morales, Ignacio; Alonso, Jorge

Valencia-Lomelí, E. (coord.). (1997). Las elecciones de 1997 : ¿transición o restauración?. Tlaquepaque, Jalisco: ITESO.

Enlace directo al documento: <http://hdl.handle.net/11117/156>

Este documento obtenido del Repositorio Institucional del Instituto Tecnológico y de Estudios Superiores de Occidente se pone a disposición general bajo los términos y condiciones de la siguiente licencia:
<http://quijote.biblio.iteso.mx/licencias/CC-BY-NC-ND-2.5-MX.pdf>

(El documento empieza en la siguiente página)

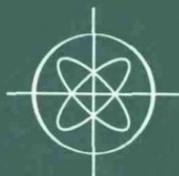
AVANCES

1

LAS ELECCIONES DE 1997 ¿TRANSICIÓN O RESTAURACIÓN?

Enrique Valencia Lomelí
Coordinador

Jorge Alonso Sánchez
María Marván Laborde
Jorge Narro Monroy
Jaime Preciado Coronado
Luis Ignacio Román Morales



ITESO
EL ESPÍRITU VIVIFICA

CENTRO DE INVESTIGACIÓN Y FORMACIÓN SOCIAL

CUADERNOS DE INVESTIGACIÓN

**LAS ELECCIONES DE 1997
¿TRANSICIÓN O RESTAURACIÓN?**

AVANCES

1

LAS ELECCIONES DE 1997 ¿TRANSICIÓN O RESTAURACIÓN?

Enrique Valencia Lomelí
Coordinador

Jorge Alonso Sánchez
María Marván Laborde
Jorge Narro Monroy
Jaime Preciado Coronado
Luis Ignacio Román Morales



ITESO
EL ESPÍRITU VIVIFICA

CENTRO DE INVESTIGACIÓN Y FORMACIÓN SOCIAL

CUADERNOS DE INVESTIGACIÓN

ITESO

Rector

Lic. Pablo Humberto Posada Velázquez, S.J.

Director de Integración Comunitaria

Lic. Roberto de la Garza-Evia Ugarte, S.J.

Director del Centro de Investigación y Formación Social

Lic. Jorge Narro Monroy

© D.R. 1997, Instituto Tecnológico
de Estudios Superiores de Occidente, ITESO,
Periférico Sur 8585, Tlaquepaque, Jalisco.

Impreso y hecho en México

Printed and made in Mexico

ISBN 968-6101-72-1

INDICE

PRESENTACIÓN 7

ANTE UNA RECUPERACIÓN ECONÓMICA
ENDEBLE Y CON RIESGO DE REPETIR
PERIODOS DE CRISIS GLOBALES 9

Enrique Valencia Lomelí
Luis Ignacio Román Morales

ELECCIONES DE JULIO 1997:
UNA OPORTUNIDAD PARA DAR UN PASO SIGNIFICATIVO
EN LA TRANSICIÓN A LA DEMOCRACIA 19

María Marván Laborde
Jorge Narro Monroy
Jaime Preciado Coronado
Enrique Valencia Lomelí

JALISCO EN EL ESCENARIO NACIONAL 39

Jorge Alonso Sánchez

PRESENTACIÓN

No es usual, lamentablemente, que la universidad privada haga investigación. Ciertamente que tampoco la empresa y sí, en cambio, el Estado y la universidad pública. Las razones son muchas pero no es éste el lugar para considerarlas.

Este es lugar para celebrar que aparezca una nueva publicación, oriunda precisamente de una institución privada: Avances.

Se trata de una colección, a través de la cual el Centro de Investigación y Formación Social (CIFS), perteneciente a la Dirección de Integración Comunitaria del ITESO, divulgará los resultados de sus esfuerzos de investigación, lo mismo que textos y ponencias de autores de otras casas.

En ese primer número de Avances, coordinado por Enrique Valencia, se presentan trabajos del propio Valencia, sobre la coyuntura económica; de María Marván, Jorge Narro y Jaime Preciado, sobre el momento político nacional, con énfasis en el proceso electoral y sus previsible escenarios; y Jorge Alonso, sobre la situación política en Jalisco.

Esperamos que este nuevo producto editorial del ITESO colabore, al igual que los otros y los de otros, en la formación no sólo de profesionistas sino de ciudadanos más y mejor dotados para enfrentar el reto de nuestros tiempos —y de todos: la construcción de una sociedad “en paz con justicia y dignidad”.

*Lic. Roberto de la Garza-Evia Ugarte, S.J.
Director de Integración Comunitaria, ITESO*

ANTE UNA RECUPERACIÓN ECONÓMICA ENDEBLE Y CON RIESGO DE REPETIR PERIODOS DE CRISIS GLOBALES

*Enrique Valencia Lomelí
Luis Ignacio Román Morales*

La economía se encuentra plenamente integrada al proceso electoral mexicano. En este contexto, en 1997, uno de los discursos más presentes ha sido el de la recuperación económica. Sin embargo, la recuperación es aún sumamente endeble y la economía nacional no ha alejado la posibilidad de caer en las crisis repetitivas de los últimos decenios.

Para la memoria (I): las razones de la crisis de 1994-1995

El modelo económico “*triumfante*”, impulsado por Carlos Salinas, era (y es) endeble estructuralmente por varias causas: dependencia del ahorro externo (8% del PIB, 1994); dependencia del capital especulativo (en seis años llegaron al país cerca de 100,000 mdd en inversiones, la mayor parte especulativas); ausencia de crecimiento significativo (alrededor de 3% en el sexenio pasado, en promedio anual frente al crecimiento histórico del periodo 35-81: 6-7% anual); apertura comercial acelerada, disminución del contenido nacional de las exportaciones y rompimiento de las cadenas productivas; sobrevaluación sexenal del peso; tipo de competitividad de corto plazo (bajos salarios y, en el mediano plazo, choque devaluatorio).

Para la memoria (II): la propuesta presidencial para enfrentar la crisis (1995-1997)

El diagnóstico implícito de la política de ajuste propuesta para 1995 y del Plan Nacional de Desarrollo (1995-2000) fue que la crisis había sido generada por factores de política económica y

algunos de tipo estructural: en cuanto a los primeros, mal manejo del tipo de cambio y, en cuanto a los segundos, exceso de dependencia en el ahorro externo y débil ahorro interno. A partir de ahí, la propuesta ha sido continuar el mismo modelo de Carlos Salinas sólo que con mayor proporción de ahorro interno. Se trata de continuar con el mismo modelo de apertura y exportador, porque supuestamente no “hay de otra”. Los voceros oficiales nos dicen que plantear otra política económica (¿cuál?) sería más costoso, puesto que inhibiría la confianza de los inversionistas (¿cómo comprobarlo?).

Para enfrentar la crisis en el corto plazo se planteó otra vez (como en el sexenio de De la Madrid) un ajuste de corte ortodoxo: devaluación brusca, control monetario y crediticio, aumento en las tasas de interés, austeridad en el gasto público, impulso a las exportaciones, control salarial estricto y salvamento financiero internacional (el salvamento más fuerte en la historia de las IFI's), con el aval de la factura petrolera

El diagnóstico oficial parte del supuesto de que no se puede asegurar el desarrollo social sin contar con un esquema económico viable que atraiga la inversión y la eficiencia del mercado. Sin embargo, desde hace quince años, se ha roto regularmente la expectativa de viabilidad económica al tiempo que se degrada permanentemente la estructura social.

¿Cuáles han sido los resultados de la política de ajuste planeada? ¿Estamos dejando atrás la crisis? ¿Estamos ya en una recuperación sostenible?

El discurso de la recuperación

Desde 1996 las autoridades gubernamentales han estado repitiendo permanentemente un mensaje a la sociedad: ya estamos saliendo de la crisis, la recuperación ya llegó. Se habla de crecimiento, de cuentas comerciales sanas, de reducción inflacionaria, de estabilidad del peso, de tasas de interés a la baja y de deuda externa controlada. ¿Cuál es la realidad de esta tan traída recuperación? ¿Es firme? *En términos generales, pensamos que la recuperación es aún endeble y que, en las actuales condiciones, no podemos hablar de crecimiento sostenible. Vayamos por partes:*

Crecimiento: en 1995, tuvimos la peor recesión de la postguerra (caída superior a 6% del PIB); en 1996, crecimos a 5.2% y en 1997 estaremos de nuevo entre 4 y 5%. Es buena noticia el crecimiento, pero al final de 1997 estaríamos apenas en un nivel cercano al de 1994. Las tasas de crecimiento son aún insuficientes no sólo en este breve periodo de 1995-1997 sino desde 1982. Como consecuencia, el PIB por cabeza de 1997, con todo y los incrementos de 1996 y 1997, sería aún menor en 3.6% al de 1994 y el PIB por persona activa sería inferior al de 1970. Además, el dinamismo económico está basado en el sector externo (el que entre 1994 y 1997 habrá crecido 14%) y en cambio el sector interno continúa realmente deprimido (entre 1994 y 1997 habrá descendido cerca de 12%).

Superávit comercial. También De la Madrid se vanagloriaba del superávit comercial. Efectivamente, desde 1995 tenemos superávit comercial, pero éste empieza a reducirse. Este superávit va asociado a la caída de la demanda interna y tenderá a desaparecer al incrementarse el PIB. Así, en términos generales, las importaciones han aumentado más que las exportaciones desde abril de 1996. El superávit de abril de 1997 fue de sólo 50 millones de dólares. El déficit comercial reaparecerá próximamente. E incluso si observamos el comercio no maquilador, México cuenta ya con un déficit comercial importante, lo mismo que si tomamos en cuenta sólo al sector industrial manufacturero. Otro elemento es que, a diferencia de la crisis de 1982, las importaciones respecto al PIB no se redujeron significativamente, porque la apertura y la desarticulación de las cadenas productivas impide una reducción notable del peso de las importaciones. No hay duda: en el corto plazo, tendremos de nuevo déficit comercial global. ¿Será importante? ¿Podrá ser mantenido en niveles manejables?

La inflación está bajando. En 1995, la inflación fue de 52% y en 1996 bajó a 27.7%. Consideramos que llegará al fin de este año 1997 a 20-22%, aunque la planeada es 15%. Uno de los objetivos centrales de la política económica es la reducción de la inflación a toda costa. Parece que se mantendrá contra viento y marea, como lo hizo Pedro Aspe, la política anti-inflacionaria que busca llegar a una inflación de un dígito.

El peso está estabilizado, exceptuando ciertos movimientos devaluatorios como el de octubre del año pasado. De nuevo, el peso ha perdido aceleradamente la sub-valoración a la que se llegó con la hiper-devaluación de 1994. En general, se mantiene la política de dólar estable para bajar la inflación: ¡atención a la sobre-valoración salinista! Según algunos análisis ya tenemos más de 10% de sobre-valoración, según otros sería menor, pero los riesgos de dinámica de sobre-valoración ya están presentes. Si se sostiene esta política veremos las presiones para otra devaluación fuerte próximamente. Con la sobre-valoración se incentivan las importaciones y se afectan las cadenas productivas nacionales y, por lo tanto, el empleo.

Las tasas de interés están bajando: de cerca de 50% (CETES) a finales de 1995 han bajado, con altas y bajas continuas, hasta alrededor del 20% en la actualidad. Con reinversión de intereses, las tasas efectivas pueden llegar hasta el 30% anual, para (junto con un dólar estable) atraer inversiones o capitales fugados nacionales. Pero el problema más importante es que las tasas que cobran los bancos son netamente superiores; los márgenes de intermediación financiera se mantienen de esta manera sumamente elevados, muy por encima de los usuales de nuestros vecinos del Norte. Esta política impide un mayor dinamismo económico, dado que los productores difícilmente buscarán créditos a tasas tan elevadas.

Los problemas de los deudores de la banca se han ido negociando con los diferentes planes emergentes. Sin embargo el problema sigue siendo enorme: según el índice SAC (muestra de empresas en cartera vencida, publicado regularmente en *El Financiero*), la cartera vencida está en cerca del 50% cuando en febrero de 1995 estaba apenas en el 21%; incluso ya se menciona nueva cartera vencida de los que reestructuraron. El costo ha sido sumamente elevado (poco menos del 10% del PIB en valores actuales) y no se resuelve a fondo el problema.

La deuda externa está controlada: llegó en 1996 a 170,000 mdd (cerca del 50% del PIB, como en 1982 año de la supercrisis de la deuda mexicana) y se ha reducido a 165,000. Sin embargo, hemos llegado a esta pequeña reducción a costa de los refinanciamientos con muy elevadas tasas de interés ofrecidas por los

diferentes bonos mexicanos. En 1996, el servicio de la deuda fue de 31,000 millones de dólares y la deuda sólo se redujo en 5,000. Vivimos en un estado permanente de refinanciamiento de la deuda. Estamos pagando más del 9% del PIB en servicio de la deuda (pago de capital más intereses) cuando en el sexenio de Carlos Salinas pagamos 5.8%. Para crecer de manera más significativa requerimos de inversiones cercanas al 27-28% del PIB y apenas nos estamos acercando al 20%. ¿Cómo invertir más si estamos pagando cerca del 9% del PIB en servicio de la deuda?

La debilidad social de la recuperación

La solución de la crisis no es aún real para las mayorías en lo que toca a su nivel de vida. El poder de compra de los salarios sigue disminuyendo y los trabajadores tienen que compensar con más trabajo la baja en sus ingresos reales; el empleo apenas si ha estado recuperando los puestos perdidos en 1995 y sigue aumentando el empleo precario; el consumo por persona, por lo tanto, no se ha incrementado. *La crisis, entonces, sigue presente en general en los hogares.* La recuperación no ha llegado a los bolsillos de los mexicanos, a la famosa *microeconomía*, si observamos lo que ha pasado sobre todo con el salario, el empleo y el consumo.

La *caída del poder de compra de los salarios* se ha profundizado notablemente. Las principales consultorías económicas estiman para 1997 una inflación de 18%. Con el aumento salarial de 17% en diciembre pasado los salarios aún seguirían perdiendo poder de compra y al fin del año los mínimos y los industriales manufactureros habrían caído en lo que va del actual gobierno poco más del 20%. En números redondos, los salarios mínimos reales de 1997 se acercarán apenas a 20% de los de 1976. Un trabajador tendría que ganar así entre 4 y 5 salarios mínimos de 1997 para ganar lo mismo que un salario mínimo de 1976. Se sigue manejando claramente al salario como un indicador de control de inflación.

Según el discurso oficial, la caída de los salarios mínimos no es un indicador relevante porque la gran mayoría de los trabajadores no gana un salario mínimo sino más. Sin embargo, en

53% de los ocupados obtiene entre menos uno y dos salarios mínimos y 15.2% de los ocupados no obtiene ingresos (generalmente trabajadores familiares y la mayor parte en el campo). Es decir, más de dos terceras partes de la población ocupada obtiene entre 0 y 2 salarios mínimos. *La política de salarios mínimos afecta a una gran parte de estos ocupados.*

Por otra parte, son cada vez más los trabajadores que ganan más de 5 salarios mínimos (en 1996, 7.2% de los ocupados), pero una buena parte de éstos han intercambiado más pago o más ingresos por más horas de trabajo. E incluso en 1996, fueron más los ocupados que obtuvieron entre menos 1 y dos salarios mínimos que se vieron obligados a aceptar una ocupación con una jornada laboral superior a las 48 horas. *Así, una estrategia para mantener ingresos o aumentarlos ha sido el incremento de horas de trabajo.*

El empleo recibió un impacto severo en 1995. El desempleo se duplicó pasando de 3.6% en el último trimestre de 1994 a 7.4% en el tercero de 1995. Desde entonces ha tendido a reducirse, hasta alcanzar 4.3% en el primer trimestre de 1997. Entre 1996 y 1997 se recuperaron los empleos perdidos en 1995, sin embargo, no se han generado los empleos necesarios para cubrir la llegada de los jóvenes a la edad de trabajar: cerca de 1.2 millones por año ni para compensar el aumento de desempleo generado en 1995 e inicios de 1996. Además gran parte de los nuevos empleos son precarios: el subempleo (medido por criterio combinado de ingresos y jornada de trabajo) habría aumentado entre 1991 y 1995 de 31.5% del empleo total a 34.8%. *Más de una tercera parte de los empleos sería en realidad subempleo.* Uno de los problemas del modelo actual es que no genera empleos suficientes, bien remunerados: para el sector externo es importante la competitividad precio (bajos salarios) y para el sector interno es muy difícil la generación de empleos cuando está deprimido.

El consumo, por supuesto, no se ha recuperado significativamente. Por ejemplo, después de una caída cercana al 7% en 1995, el consumo privado apenas aumentó en 2.1% en 1996 y podría aumentar 2.4% en 1997.

¿Cuál es la novedad del Programa Nacional de Financiamiento del Desarrollo (Pronafide)?

Los *objetivos* señalados para este Programa son garantizar que no habrá crisis financiera en lo que resta del sexenio, alcanzar un crecimiento sostenible, incrementar el ahorro interno, aumentar la eficiencia de la inversión pública y privada, consolidar la estabilidad, atender la creciente demanda de más y mejores empleos y lograr recursos para combatir la pobreza. El texto del Pronafide habla de buscar un crecimiento que fortalezca el rostro humano de nuestra economía.

Algunas de las *principales metas del Pronafide* son alcanzar tasas de crecimiento promedio de 5% entre 1997 y 2000 (crecimiento de 4.5% en 1997 y 5.6% en 2000), generar más de un millón de empleos al año, lograr tasas de crecimiento de las exportaciones de 12% anual, aumentar el consumo per cápita (5% en 2000), reducir la inflación hasta 7% en el año 2000, incrementar los salarios reales (sin especificar una meta precisa en este aspecto), alcanzar una tasa de inversión de 25% del PIB, lograr una tasa ahorro de 22% del PIB (18% ahorro privado, 4% ahorro público), atraer ahorro externo de 3% de PIB (año 2000), conseguir que en el año 2000 los 10 millones de mexicanos que viven en las localidades más pobres estén protegidos con el paquete básico de los servicios de salud, edificar 1,200,000 viviendas entre 1997 y 2000, y mejorar la eficiencia terminal educativa para el año 2000 (que 9 de cada 10 niños que inician la primaria la terminen; que 3 de cada cuatro que ingresen a secundaria la concluyan).

Las *estrategias* planteadas para encaminarse hacia esos objetivos y metas fueron promover el ahorro del sector privado (sistema de pensiones, promoción del ahorro popular, política fiscal promotora del ahorro y la inversión), consolidar el ahorro público (racionalizar el gasto público), fortalecer y modernizar el sistema financiero (mejor regulación y supervisión del sistema, promoción de la penetración-crecimiento del mercado financiero, canalización eficiente de recursos a la inversión, reorientación de la banca de desarrollo) y aprovechar el ahorro externo como complemento del interno (fortalecer el sector exportador, promover

la IED, otorgar certidumbre financiera, mejorar las condiciones crediticias y consolidar el acceso a los mercados de capital).

No puede dejarse de lado que este Programa fue publicado apenas unas semanas antes de la jornada electoral de julio de 1997. El objetivo central del Pronafide pareciera ser el de reducir incertidumbre en el contexto electoral y sostener la importancia de la continuidad hasta el año 2000; busca “*tranquilizar a los mercados*” y convencer de las promisorias expectativas para el periodo 1997-2000. Se trata, entonces, de un objetivo electoral: *difundir la idea de la estabilidad y de la recuperación.*

¿Qué novedad en los planteamientos económicos ofrece el Pronafide? Prácticamente ninguna. En primer lugar, se continúa en la línea marcada por el PND 1995-2000. Se repite el diagnóstico respecto de la crisis (déficit de ahorro interno) y se subraya otra vez la estrategia a seguir (continuidad en el modelo económico, con correctivos para impulsar el ahorro interno). Aunque habrá que esperar los nuevos planteamientos fiscales que se están negociando en las semanas previas a las elecciones. En segundo lugar, incluso la piedra angular de la estrategia para la búsqueda de ahorro interno, la reforma al sistema de pensiones, no es una idea original del Pronafide; primero se reformó este sistema, luego se publicó el Plan maestro. Es interesante, como método de planeación, que primero se echa a andar la reforma al sistema de pensiones y luego se publica el Plan en el que se señala su importancia estratégica.

¿Cuál es el cambio en las perspectivas económicas con la publicación del Pronafide? Ninguno, salvo el mensaje implícito de que fueren los que fueren los resultados del 6 de julio se mantendrá el esquema económico. Se mantienen básicamente las perspectivas planteadas desde el Plan Nacional de Desarrollo 1995-2000.

En conclusión, en perspectiva histórica, estamos en una coyuntura cercana a la de 1991-1992, con parte del discurso de De la Madrid y parte del de Salinas: recuperación, salida de la crisis, realismo, éxito del nuevo modelo. Este discurso lleva ya al menos 15 años de repetirse. La recuperación es muy relativa y endeble, aún no llega a los bolsillos de la mayoría de los mexicanos. La

única novedad del discurso zedillista es el camino que se intenta para generar más ahorro interno.

Esta conclusión afecta enormemente la coyuntura electoral de 1997: los mexicanos entramos a un proceso electoral con la conciencia de la crisis aún presente y sin ver en la vida cotidiana una mejoría real en el nivel de vida y, más aún, con la conciencia o la experiencia en carne propia de que la pobreza se está incrementando.

La pregunta obligada es si existen alternativas reales frente a la actual política económica y frente al modelo económico vigente. El discurso oficial trata de ser contundente: no hay posibilidad real de otra alternativa; estamos ante el único camino posible. Estamos así frente a *la ética del mal menor: las inevitables pero temporales consecuencias de la inserción de México en la economía mundial*. Los círculos dirigentes están convencidos de que saldrá adelante el país con esta política económica.

El problema es que lo temporal ya se extendió durante 15 años y de seguir igual se extenderá al menos durante tres años más. *Este discurso de la corta temporalidad de los sacrificios ya perdió legitimidad social, ya no es creíble y afectará la coyuntura electoral.*

Esta ética del mal menor en realidad afecta a las mayorías de este país y las ha afectado durablemente, de tal manera que ya podemos hablar de las generaciones de la crisis. Una buena parte de los más de 20 millones de niños que nacieron durante estos años de experimento económico ha vivido las consecuencias de esta ética no como efectos menores y temporales sino como situaciones permanentes irreversibles: ¿quién podrá hablar de mal menor en las generaciones de niños malnutridos de los años 80 y 90? ¿Cuánto más durarán estas medidas de los susodichos *ajustes temporales*?

La respuesta de muchos especialistas en la materia, repetida insistentemente desde hace años, es *sí hay otras alternativas posibles al modelo económico actual*. En el mundo moderno, otros países han vivido de manera distinta y con mejores condiciones sociales los nuevos retos del fin de siglo.

**ELECCIONES DE JULIO 1997: UNA OPORTUNIDAD
PARA DAR UN PASO SIGNIFICATIVO EN LA
TRANSICIÓN A LA DEMOCRACIA**

*María Marván Laborde
Jorge Narro Monroy
Jaime Preciado Coronado
Enrique Valencia Lomelí*

Para poder entender en su justa dimensión el momento en el que estamos, es importante reconocer tanto lo que hemos recorrido como lo que nos falta por recorrer. Tan peligrosa es una actitud triunfalista como la actitud derrotista que considera que nada hemos avanzado en el camino de la transición democrática y de la superación del sistema de partido de Estado. El hecho de que las elecciones abran interrogantes y la ciudadanía sepa que no hay ganadores asegurados es, sin duda, una señal inequívoca de que hemos avanzado en el lento y tortuoso camino hacia una mayor democracia. Camino en el que ha crecido, fundamentalmente, la posibilidad de competencia entre tres partidos políticos, el PAN, el PRD y el PRI. La incertidumbre acerca de quién ganará las próximas elecciones es ya un triunfo para la vida política nacional. El PAN, el PRD y el PRI están en el escenario de la vida política nacional, forman ya parte de cualquier imaginario. Quien quiera que hable de posibilidades para la próxima legislatura toma en cuenta a estos tres partidos, quien quiera que planea una campaña política está también obligado a tomarlos en cuenta.

Quizás abusamos al otorgar una excesiva importancia al hecho electoral, cuando ese ejercicio de los derechos ciudadanos podría ser, sin dramatismos ni exageraciones, un momento inserto en la cotidianeidad sin sobresalto alguno. Sin embargo, en México tendremos que recurrir, por un tiempo imprevisible todavía, al análisis de la situación excepcional que presenta nuestro régimen político de partido de Estado. De ahí que cada elección se

enfrente con alternativas de no fácil solución: o la oportunidad de inventar el país o la de refrendar lo existente. Una disyuntiva que pone en tensión a las más diversas fibras del entramado social: por ejemplo, la política económica, la política social, el Estado que queremos, las expectativas y los valores del bienestar, de la cultura, el papel que le concedemos a la justicia social y el espacio que le brindemos al otro en un ambiente de tolerancia y pluralidad. Esta tensión es notoria porque si bien los avances son importantes y nada deleznable, las resistencias al proceso democratizador también.

Esta disyuntiva surge merced al *agotamiento del sistema político mexicano*. Distintas razones lo explican: su propio desgaste (las corporaciones, por ejemplo, han perdido en gran medida su capacidad para mantener sus relaciones clientelares y el control sobre sus agremiados y, en consecuencia, cada vez tienen menor representatividad; el PRI se ha deteriorado, entre otras razones porque su función de instrumento presidencial fue llevado al límite por Carlos Salinas, en demérito de su naturaleza original de espacio de negociación); la “maduración” de la sociedad (la “emergencia” de la sociedad civil y el fortalecimiento de los partidos políticos de oposición); los excesos salinistas (la pretensión de transexenalar el proyecto económico concentró el poder en un grupo —“la familia feliz” o “la generación del cambio”—, debilitando la Presidencia al hacerlo con su función de “fiel de la balanza”); el deterioro del modelo económico de mercado interno (ostensiblemente a partir de los 70) y el fracaso de su sustituto (el llamado neoliberal o, por Salinas “liberalismo social”).

En este contexto de avances y de limitaciones, y de excepcionalidad electoral, los mexicanos hemos apostado por el camino de la democracia para la transformación del sistema de partido de Estado. Los cambios democráticos, son lentos, complicados, consensados, incluyentes y no traumáticos. Nada aparecerá de la noche a la mañana. No importa lo que suceda el 6 de julio, el día 7 amaneceremos con un país igualmente lleno de problemas y con la necesidad de que todos y cada uno de nosotros nos comprometamos con el cambio. Bien entendido este argumento, debe ser razón para incrementar la serenidad no la apatía. Las elecciones son indispensables, nuestra participación es necesaria,

cualquier partido ve el triunfo como deseable, pero todo ello no nos da sino la oportunidad de empezar a solucionar nuestros problemas.

Vivimos un difícil proceso de transición hacia la democracia

En este ya largo camino se ha avanzado en la ciudadanización de los organismos electorales, en la construcción de un consenso real en favor de la democracia y de un sistema electoral cada vez más competitivo y en la posibilidad de gobiernos de diferentes partidos. Como punto de partida de cualquier análisis político de México, debe reconocerse este camino ya recorrido.

En los últimos años, las leyes electorales han pasado por varias reformas, una de la más significativas ha sido *la reciente ciudadanización de los organismos electorales*. La autonomía, —siempre relativa a coyunturas de poder precisas—, con la que hoy se rige el Instituto Federal Electoral, IFE, aunada a experiencias en los organismos electorales locales que apuntan en el mismo sentido, muestran el inicio de una nueva democratización del país. Junto con esto, debe destacarse que los ciudadanos han participado activamente en los procesos de vigilancia electoral y se han interesado cada vez más en la cuestión electoral.

Se ha ido así construyendo poco a poco un real consenso en favor de la democracia. Los principales actores políticos del país postulan que las diferencias de proyectos de nación o de región deben resolverse por la vía democrática. Incluso los zapatistas mismos transitan hoy por esta vía. Tanto entre los políticos profesionales y los partidos, como entre intelectuales independientes, como entre organismos empresariales del comercio o de la industria —que antes apostaban por negociaciones de cúpula, como único mecanismo de participación-negociación en el poder—, como entre una buena parte del espectro que podría considerarse dentro del movimiento ciudadano (ONG's, asociaciones civiles, nuevas asociaciones políticas nacionales y regionales), aumenta la voluntad política por fortalecer una vía democrática para enfrentar la coyuntura crítica del país.

Estamos pasando de un *sistema de partido único o casi único a un sistema cada vez más competitivo*, con zonas de competencia

electoral y posibilidad de alternancia bipartidista o tripartidista, y con zonas de permanencia de un partido dominante (PRI). A nivel nacional, tenemos una Presidencia que obtuvo el triunfo con menos del 50% de los votos totales (comparemos con las épocas en que el Presidente en turno obtenía votaciones superiores al 70 u 80%).

En el lugar del sistema de partido único va apareciendo un sistema de partidos que tiende a ser competitivo, aunque sus expresiones nacional y regional son muy heterogéneas: el bipartidismo PRI-PAN o PRI-PRD, ya se localiza en varias entidades del país y un sistema al menos tripartidista se configura ya al nivel nacional. Las votaciones que aseguran una mayoría absoluta para el partido del Estado son cada vez más raras y más remotas las posibilidades de que lo logre. En las próximas elecciones locales, los pronósticos del voto o favorecen francamente a la oposición (Distrito Federal) o son sumamente reñidos (Nuevo León, Campeche); en otros estados donde el PRI ha ganado sin mayores dificultades, hoy se pronostican triunfos muy cerrados para el tricolor, aunque no son descartables las sorpresas en San Luis Potosí, por la posible recuperación del navismo, en Colima, por el repunte que registran el PAN y el PRD, en Querétaro, por las diferencias entre los sectores del PRI con la CTM o entre los hermanos Ortiz Arana y por el importante repunte del candidato del PAN, y en Sonora, donde hay todavía muchos inconformes por la falta de justicia en el esclarecimiento del asesinato del sonorense Colosio.

Todo esto vendrá a reafirmar la coexistencia entre el PRI y una *oposición que ya gobierna a casi la mitad de los mexicanos en sus municipios y gobiernos estatales*, entre ellos 12 de las 31 capitales estatales, cuatro entidades (Baja California, Chihuahua, Guanajuato y Jalisco), municipios entre los más poblados del país (Naucalpan, PAN, y Netzahualcóyotl, PRD) y con una presencia de diputados que será creciente, al grado de disputar la mayoría de la cámara baja federal. Las posibilidades de nuevos gobiernos estatales de un partido de oposición nacional son reales en el Estado de México, Morelos, Michoacán, Tabasco, para futuras contiendas electorales.

Los avances y la consolidación de los partidos de oposición nacional son muy importantes, aunque se trata de una realidad sumamente movедiza. La transición a la democracia requiere de fuertes partidos de oposición nacional. El PAN se ha fortificado con sus cuatro gubernaturas y ha logrado triunfos importantes en las elecciones locales sobre todo en varias capitales de los estados; no con pocas dificultades, pero ha logrado mantener y gobernar los estados en los que ha triunfado. Ha experimentado que ganar una elección es solamente recibir la estafeta por parte de la sociedad para enfrentar viejos problemas y empezar a generar posible soluciones. Quienes ansiaban un cambio radical e instantáneo se han visto, irremediabilmente desilusionados.

Incluso el PAN se animó a dar un paso sumamente arriesgado en este sexenio: hacer una alianza con el Poder Ejecutivo. Aceptó la invitación a participar en un "gobierno plural". Ahora este partido está pagando caro el error de haber pensado que en un sistema presidencialista como el mexicano podrían darse alianzas a nivel del Poder Ejecutivo. Las únicas alianzas posibles en la lógica del presidencialismo están en el Poder Legislativo. *El ejercicio de co-gobierno PAN (PGR) y PRI fracasó.* La idea de una PGR en manos de un funcionario no priísta era atractiva: la posibilidad de la independencia en las indagaciones. El reto era enorme para quien tomará el cargo (la famosa rifa del tigre: un aparato coludido con narcotráfico, con una pésima imagen pública).

La suma de los triunfos locales y el éxito que había tenido Lozano Gracia en la PGR hasta noviembre de 1996 le hizo suponer al PAN que las elecciones de 1997 estaban prácticamente decididas a su favor. Fue un error de cálculo, aunque muy probablemente el PAN logrará incrementar su votación con referencia a las últimas elecciones legislativas.

El PRI-gobierno decidió romper su alianza de gabinete plural, expulsó literalmente a Lozano de la Procuraduría y encima le endosó la factura —parece ser que exitosamente— de su fracaso. La fuerza del golpe fue tal que el partido quedó parcialmente paralizado, sin tiempo para acabar de reaccionar; lo sorprendió la urgencia de una campaña electoral en la que están inevitablemente confundidas las elecciones para gobernador del DF y las

elecciones para renovar el Congreso Federal. Lo menos que podemos decir es que hasta ahora la campaña del DF ha sido ineficiente y que será sumamente complicado aislar sus efectos solamente a la capital.

Por su parte en el PRD, que a principios de sexenio no pudo revertir los resultados de la elección de Tabasco (no logró sacar a Madrazo por la alianza Presidencia-Grupo Hank González), se consolidó el liderazgo de Andrés Manuel López Obrador quién llegó a la dirigencia nacional del partido con una fuerza tal que le permitió aprovechar la coyuntura de noviembre de 1996. A partir de entonces y hasta mayo de 1997 se ha movido en una espiral ascendente que pasa por los fracasos y golpes a Acción Nacional pero se retroalimenta en sus propios triunfos en el Estado de México, Morelos y Guerrero. El éxito de su campaña en el DF ha servido para apuntalar la presencia del partido a nivel nacional.

Las resistencias y los límites a la transición democrática son poderosos

Sin embargo, *el partido en el poder ha manifestado resistencias para avanzar hacia una transición más decidida y menos administrada*. Esta resistencia se ha notado en los mecanismos impuestos por el PRI para el financiamiento de las campañas y en la participación presidencial en la campaña del PRI. *Continúa dominando en los aparatos dirigentes (estatales y en algunos privados como lo muestra la escaramuza entre el líder de la ABM y el PRD en este junio de 1997) la idea de que lo fundamental es la defensa del modelo económico*, es decir, de que primero es lo económico y luego vendrá lentamente el cambio político. La ortodoxia de la política económica de ajuste a la mexicana supone que primero vienen los cambios económicos y la generación de la riqueza, luego vienen los cambios políticos y el "efecto goteo" en la redistribución del ingreso.

El PRI se encuentra en un proceso de descomposición interna pero con grupos todavía muy fuertes al interior que no están dispuestos a comprometerse con un cambio democrático y que no quieren soltar el poder. Hay, en general, dos grupos que tienen

intersecciones pero que no necesariamente son idénticos. El grupo cuya prioridad es asegurar el programa económico y el grupo cuya prioridad es el control político porque no alcanzan a verse a sí mismos fuera de la lógica de privilegios y prebendas políticas. El primer grupo está dispuesto a ceder en el campo de la política para asegurar el modelo de desarrollo económico. El segundo está dispuesto a hacer concesiones económicas con el modelo para asegurar sus privilegios políticos y garantizar su impunidad.

El PRI ha entrado en una lógica de acusaciones internas en la que se trata de encontrar un chivo expiatorio cuyo sacrificio detenga el crecimiento de su impopularidad. Le urge deslindarse del salinismo, sin embargo lo hace con un gran simplismo, al tratar de reducir los errores priistas a los excesos cometidos por Raúl y Carlos Salinas de Gortari. Con esta política se mantiene latente la amenaza de la violencia entre las élites gobernantes, el rompimiento de la vieja regla central de la estabilidad política mexicana (negociar, esperar el turno sexenal y no matar).

Muestra de la crisis interna es que en tres años ha habido necesidad de cambiar tres veces a la dirección del partido. Ma. de los Angeles Moreno y Santiago Oñate no pudieron sostenerse, la permanencia de Roque Villanueva está íntimamente ligada, por su propio discurso, a los resultados electorales. Si pierden el DF y la mayoría en el Congreso, él mismo sabrá que sus días están contados y todo lo que tendrá que hacer será empezar a preparar su salida, durará en el cargo tanto como le tome, a él, al partido y al Presidente, definir a su sustituto.

Cada vez que el PRI ha perdido unas elecciones estatales, ya sea que hablemos de gubernaturas o de congresos estatales, ha dado muestras de desesperación. Ello nos podría servir para comprobar que no hay, ni con el PRD ni con el PAN, espacios negociados. No se puede seguir cayendo en la trampa de creer que todo está negociado desde arriba. Quizá por primera vez no es tan sencillo ignorar el voto de los ciudadanos. Cada triunfo de la oposición ha sido arrancado en contra de la voluntad del partido hegemónico.

Los límites impuestos a la reforma electoral ilustran los objetivos estratégicos buscados por el PRI: resistencia para reducir

el financiamiento de las campañas electorales, resistencia para que los ejecutivos federal y estatales suspendan la publicidad de programas que puedan inducir al voto por cierto partido 30 días antes del 6 de julio, resistencia para ciudadanizar en su conjunto al IFE, evitando la remoción de la mayor parte de Vocales Ejecutivos que organizaron las elecciones en 1994 e intentos por legitimar la participación del ejecutivo federal en la campaña electoral.

Sobretudo, la transición es vista por algunos sectores del PRI como una amenaza por la revisión de cuentas que ella exige, lo cual llevaría consigo dos efectos que pueden parecer desastrosos para un partido cuya reproducción del poder se ha sostenido en mucho sobre esos pies de barro que representa la corrupción: la multiplicación de juicios en torno a ese tema y la legislación de la llamada "accountability", o la necesidad de rendir cuentas ante los representantes de la comunidad y de dar crédito a contrapesos institucionales responsables de fiscalizar la actuación pública.

De esta manera, *la transición ha sido así notablemente aco-tada desde el partido de Estado*. Por otra parte, no ha habido un liderazgo presidencial real y decidido que ponga como prioritaria la transición democrática (en las historias recientes de transición, un liderazgo es esencial) y la separación entre partido y gobierno. ¿Hasta donde se puede comprometer el Presidente de la República con el partido político de sus preferencias personales? Lo que en un régimen presidencialista o parlamentario —que no tenga resabios autoritarios y que cuente con un sistema competitivo de partidos— entra en la normalidad democrática cotidiana, en el caso mexicano se convierte en un tema espinoso.

Ese es el caso de la "sana distancia" que ofreció el Presidente Zedillo al inicio de su mandato, la cual se ha tenido que redefinir al calor del avance de la oposición, tanto como al del avivamiento de los conflictos internos del PRI, que no se acaban de enfriar después de los crímenes de Estado que lo han venido fracturando. En todo caso, el crecimiento de la oposición en las elecciones recientes y en las que están por venir en julio de éste año, propician que el primer mandatario del país se involucre directamente en la campaña de su partido. Un subproducto de las elecciones de julio de 1997 podría ser un convenio presidencial de

la necesidad de encabezar la transición a la democracia en lugar de comprometerse únicamente con un partido en crisis y en declive.

El conflicto interno del PRI hay que situarlo en un triángulo de conflictos —que son un tanto indescifrables—, que han marcado *una actuación presidencial oscilante, de avance y freno, con rasgos en ocasiones de debilidad y en otras de autoritarismo*: en primer lugar, la persistencia de redes de poder actuantes y beligerantes cuyo control aún lo tiene el ex-presidente Carlos Salinas; ellas acotan y limitan la actuación y el liderazgo que necesita la institución presidencial.

En segundo lugar, la competencia por la hegemonía al interior del PRI que hasta ahora tiene el Grupo Atlacomulco que encabeza el Prof. Carlos Hank González, cuyo aliado más visible en el gobierno es el Secretario de Gobernación. Este Grupo ha sido el soporte de la Presidencia actual y las concepciones políticas de este grupo han la han permeado. Este Grupo no es el mejor ejemplo de apertura a la democracia como lo muestra claramente el caso de Tabasco (gasto de campaña comprobado por cerca de 70 millones de dólares en 1994).

En tercer lugar, la definición de las estrategias de control político que supone el nuevo contexto nacional, con partidos de oposición que ganarán la gubernatura del DF y, muy probablemente, la mayoría de la Cámara baja del Congreso de la Unión, tendencias frente a las cuales ni los dirigentes de partido, ni de los sectores, ni los parlamentarios del tricolor, comparten las hipótesis de solución; también aquí podría situarse la definición de las estrategias frente a los grupos insurreccionales, porque mientras algunos postulan la línea dura y militarizada, otros llaman la atención a no continuar desgastando la imagen de los militares bajo los reflectores después del asunto Gutiérrez Rebollo. Podríamos decir, en síntesis, que *vivimos un presidencialismo acotado (por sus propias alianzas) y nervioso (por la posible derrota del PRI)*.

A más de dos años de la ascensión a la Presidencia de Ernesto Zedillo, en síntesis, el país todavía no se define por la restauración del pasado autoritario o por la transición pacífica a la democracia. El Presidente —vértice todavía del poder político— pa-

rece inclinarse hacia la primera opción, dada su necesidad de encontrar en el PRI y en el Ejército un apoyo y un instrumento para su gobierno.

Pero las resistencias no sólo vienen del campo priísta. *La oposición aún no se decide a poner a la transición en el centro de sus estrategias más allá de la defensa de sus propios intereses partidarios* y priva una enorme desconfianza entre el PAN y el PRD. Por ella, *los principales partidos de oposición deciden ir solos a la campaña electoral*: la hipótesis del PAN y del PRD es que el camino a la transición democrática pasa por el fortalecimiento del propio partido o, dicho de otra manera, que el propio partido es el que dirigirá la transición a la democracia. Lo que estará en juego en el proceso de 1997 es que o los partidos de oposición se refuerzan o ante la división de la oposición se restaura de nuevo la fuerza del partido de Estado. Lo que se debatirá será que, ante el posible equilibrio de fuerzas en la Cámara de Diputados, la oposición teja inteligentemente alianzas de transición o que el PRI vuelva otra vez a ganar la partida y de nuevo desmadeje hábilmente la posible alianza entre el PAN y el PRD.

Además, *los vínculos entre los partidos y los organismos civiles de la sociedad son endebles*. El corporativismo tradicional que todavía aporta el voto duro para el PRI está cada vez más acosado por demandas internas democratizadoras, que son avivadas por las penurias causadas por el modelo económico. Esto aleja a una franja importante del electorado de las filas tricolores.

También, la falta de un programa de claro contenido en términos de justicia social por parte del PAN, abre brechas que son difícilmente salvables entre ese partido y el movimiento sindical, las organizaciones populares de base territorial, las agrupaciones de deudores y toda aquella forma organizada que supere la visión liberal individual que inspira la concepción partidaria panista.

Si bien el PRD ofreció una cuota importante de posiciones entre sus candidatos a puestos de elección popular para diversas organizaciones sociales, persiste en su concepción cierta desconfianza en torno de la autonomía que puedan reclamar esos organismos sociales que ha invitado a participar. Así lo muestra la eliminación, en los hechos, que se propuso ese partido de las llamadas candidaturas ciudadanas, por medio del refuerzo de la

disciplina unitaria de su fracción parlamentaria en la Cámara de Diputados federal.

Un elemento sumamente preocupante es que *la negociación de la paz está en impasse peligroso*. Los signos mostrados por el gobierno han sido ambiguos: la comisión gubernamental se abría a la negociación a principios de año mientras que al nivel estatal la represión y la intolerancia se hacían sentir en varias regiones de la entidad. Se ofrecía una postura de la Presidencia de la República en torno al tema de la Autonomía, mientras que se descalificaba el trabajo de la Comisión de Concordia y Pacificación, por parte de los comisionados especiales del Ejecutivo Federal. Se cambia al Comisionado para la Paz que había endurecido el diálogo (Marco A. Bernal) por la parte gubernamental, dejando en manos de un funcionario con trayectoria institucional abierta a la negociación (Pedro J. Coldwell) y, al mismo tiempo, se militarizan las zonas conflictivas de Chiapas, Guerrero, Oaxaca, Tabasco y Veracruz.

Los aspectos sustantivos de la negociación siguen vigentes, aunque la determinación presidencial por tratarlos y por buscar soluciones no es patente. El Ramo 26, por citar un caso emblemático en donde la voluntad presidencial podría translucirse, registra el decremento más agudo respecto al total del país: los recursos que ese programa destina para Chiapas en 1997 descenden, en términos reales, en un 80% (¡ochenta!) seguido de Chihuahua, que ve reducidos sus recursos en casi un 60% respecto a lo que recibió en 1996. Es evidente que la figura gubernamental de las Autonomías requiere de una discusión en el marco del federalismo que necesita nuestro país y que cualquier solución que se adopte sobre ese tema necesita de una federación subsidiaria que provea recursos suficientes para fortalecer un esquema compensatorio en la distribución de los recursos entre los que más y los que menos tienen.

Hay, además, una falta de sincronización entre el proceso democratizador que se da en el país y la dinámica autoritaria que caracteriza al Chiapas de 1997. Los enfrentamientos entre los grupos religiosos y la división política interna se agudiza en las zonas limítrofes entre zapatismo y el resto de los municipios de esa entidad; en varias ocasiones esas diferencias son aumentadas, y

en lo posible aprovechadas, por el partido y su gobierno estatal. A la par, los grupos paramilitares cuentan con todo un espacio de complicidad en el gobierno estatal y su desmantelamiento no forma parte de las negociaciones.

Los indicios son muy claros para afirmar que *no existe voluntad política para enfrentar la corrupción a gran escala*. El ejemplo del cierre del caso CONASUPO es la evidencia más fuerte. La oposición había logrado mostrar la necesidad de profundizar las indagaciones (caso de los vagones de trenes desaparecidos con granos, de las importaciones de maíz a sobre precio, etc.). La decisión oficial fue el cierre del caso. Poco antes del fin del proceso electoral de 1997, el caso CONASUPO fue semi-abierto en términos de opinión pública. ¿Se trata de nuevo el eje del distanciamiento Salinas-Zedillo? La respuesta pareciera ser positiva ante el inexistente desenlace judicial del asunto.

Los posibles escenarios de las elecciones de julio de 1997

Hemos vivido una campaña para las elecciones legislativas que se ha montado en la elección de jefe de gobierno del DF. Esto es culpa parcialmente de los medios pero también comparten la responsabilidad los partidos. No han logrado convencer a los ciudadanos de la importancia del Poder Legislativo, los candidatos tienen un perfil muy bajo y por si fuera poco no hay discusión pública de la posible agenda legislativa por parte de ninguno de los partidos políticos. No hay una verdadera incorporación de la ciudadanía al proceso político. Por ello, es un signo alentador el intento de Alianza Cívica para consultar a los ciudadanos, en el mes de junio, acerca de elementos centrales de la agenda legislativa.

Las campañas arrancaron en medio de sondeos a la opinión pública —otro de los nuevos activos del proceso democratizador— y con la fuerte influencia de lo que pueda suceder en el DF. El DF, desde los años 70, vota en general a favor de la oposición (tomada en su conjunto) y el PRI es minoría. Difícilmente el PRI podrá revertir esta tendencia en el DF. Lo muestra el hecho de que Alfredo del Mazo, en varias encuestas, aparece en el tercer lugar de las preferencias y de que las baterías de este partido

parecieran dirigirse a no quedar relegados a este lugar y situarse en un honroso segundo sitio.

La posibilidad de una derrota en el DF (más real) y de perder la mayoría en la Cámara de Diputados (en discusión) ha determinado la fuerte campaña iniciada por el PRI, con los siguientes ejes: el PAN es un partido ineficiente en sus gobiernos y sumamente conservador (hasta fascista); el PRD es un partido vociferante y violento, que además también está coludido en acciones corruptas. Más que en presentar propuestas, la campaña del PRI se ha centrado en tratar de debilitar a sus oponentes con el discurso señalado. Este tipo de campaña sucia no es la mejor garantía para la transición democrática, pero el problema es que no sólo el PRI la ha utilizado y en diversas ocasiones los otros partidos han caído en ella. Pareciera que estas campañas han generado el efecto contrario al pretendido: los atacados han resultado favorecidos por las preferencias en las encuestas (véase el caso de los ataques de Carlos Castillo Peraza a Cuauhtémoc Cárdenas).

Dentro de este contexto, ¿cuáles son los posibles escenarios? De acuerdo a las tendencias que se reflejan en las encuestas de opinión, podríamos prever los siguientes resultados electorales. Consideramos indispensable incluir en el análisis el impacto de la elección para gobernador del DF. El escenario de triunfo de Cuauhtémoc Cárdenas en tal contienda electoral parece irreversible (hasta el inicio de la tercera semana de junio), aunque las proporciones de votos que él obtenga son el dato interesante a discutir. La amplia ventaja que lleva el candidato perredista se comporta dentro de los márgenes de un sistema tripartidista, en el que no hay una mayoría absoluta que permita gobernar como en los tiempos del partido hegemónico.

Para analizar los posibles escenarios del Congreso vamos a partir del supuesto de que Cárdenas ganará el DF. La ventaja de más de 15% en las encuestas nos permiten casi asegurarlo. Si esto es cierto entonces la preocupación central será analizar cuáles son los cuatro escenarios posibles en la Cámara de Diputados.

Primer escenario: restauración priísta

El PRI gana la Cámara de Diputados con una votación que fluctúa entre el 46 y el 52%. Ello supondría una recuperación increíble si se analizan los resultados electorales de los últimos 27 de meses. La sociedad y los partidos de oposición pondrían en cuestión los resultados electorales. Un escenario de esta naturaleza podría llevar a una mayor polarización de las fuerzas políticas donde se pondría en cuestión la posibilidad de transformar el régimen por la vía pacífica de las reformas legales. Escenario poco probable y, a pesar de que pareciera el más seguro para algunos, sería en realidad sumamente riesgoso.

Segundo escenario: mayoría priísta limitada

El PRI gana la Cámara de Diputados con 43-45% de la votación. Asegura la mayoría absoluta, no podría hacer modificaciones a la Constitución y se vería en la necesidad de negociar cambios con la oposición; dependiendo de la reforma que quisiera impulsar, buscaría pactar con el PAN, el PRD o posiblemente uno de los chiquitos, previsiblemente el Verde Ecologista. Puede gobernar solamente con leyes secundarias, las que puede aprobar sin problemas y con ello protege el proyecto económico de Zedillo. En la coyuntura actual, éste es el escenario deseado por el PRI, el que lo dejaría en la mejor posición sobre todo si asegura el segundo lugar en el DF.

En este caso el PAN y el PRD se neutralizarían mutuamente, el PAN tendría algunas gubernaturas importantes, el PRD, el DF; ambos dependerían económicamente del gobierno federal y quien mantendría el control político y económico sería el PRI. Se cubrirían nuevamente las apariencias de la democracia sin ningún incentivo real para cambiar el status quo. Es un escenario muy probable y por que va a luchar el PRI hasta sus últimas consecuencias.

Podrían jugar en favor de este escenario los siguientes elementos: primero, la búsqueda de voto del miedo como en las elecciones de 1994; segundo la posibilidad de un elevado abstencionismo dado que se trata de elecciones federales (no están en juego las autoridades más cercanas a los electores: los alcaldes

y gobernadores), son intermedias (no se elige Presidente) y se efectúan en un momento en el que los agravios del PRI no se sienten ya tan vivos como en el 95 y las promesas del PAN no se han cumplido en la medida de las expectativas de muchos de sus gobernados. El abstencionismo, entre otros efectos, deja las decisiones a merced del "voto duro", donde el PRI conserva aún núcleos importantes de credibilidad. Es factible la reaparición del fraude en algunas zonas no vigiladas suficientemente (por ejemplo, cerca de 25,000 casillas en las que no habrá ni representantes de partidos de oposición ni observadores electorales independientes). Este último tema es, por supuesto, delicado, pero es imposible ignorar un par de fenómenos: que la llamada "ciudadanización" de los órganos electorales no garantiza el control absoluto del proceso por parte de los consejeros (por razones jurídicas e incluso físicas) y que el PRI ha asumido una actitud tanto de ataque a algunos ciudadanos involucrados en los procesos electorales (consejeros y observadores) como de "cerrazón" y de entorpecimiento frente a algunas medidas e iniciativas que buscan dar mayor transparencia y equidad a los comicios.

Tercer escenario: un Legislativo tripartidista sin mayoría absoluta de ningún partido

El PRI gana entre el 30 y el 42% de la votación, ninguno de los tres partidos logra la mayoría absoluta en la Cámara y tenemos tres fuerzas similares que para no neutralizarse tendrían que empezar a buscar acuerdos, difícilmente podrían sabotearse. Este es un escenario tan probable como el anterior pero que tiene tres posibles subescenarios.

a) El PRI gana la mayoría relativa. Se alía según las circunstancias con el PAN o el PRD. Equilibrios precarios, difícilmente sostenibles. El PRI podría dedicarse tres años a buscar una nueva restauración en el año 2000. Pero al perder el DF, el Grupo de Hank González recibiría un fuerte golpe y permitiría al presidente Zedillo mayores márgenes de maniobra para imponer su candidato a las elecciones presidenciales del 2000.

b) El PRD gana la mayoría relativa, se apalanca con el triunfo del DF y adquiere una gran fuerza para las negociaciones. Este partido

estaría situado en una posición privilegiada para las elecciones del año 2000. Ante este escenario, los conflictos al interior del PRI podrían exacerbarse.

c) El PAN gana la mayoría relativa. Esta sería una situación de empate técnico (PAN, Cámara, PRD, DF, y PRI, Presidencia) que obligaría a los tres partidos a reconocer que vivimos en un sistema de partidos altamente competitivo, que ninguno de los tres partidos puede darse el lujo de menospreciar o ignorar a ninguna de las otras dos fuerzas políticas más importantes del país y que la única manera de no trabar el sistema exige un alto grado de responsabilidad de las tres partes ya que todos cuentan con los suficientes elementos de presión como para paralizar el sistema y todos tienen, igualmente, interés en que esto no suceda.

La situación de no mayoría absoluta de ninguno de los tres partidos en la Cámara de Diputados, podría llevarnos a que éstos se sentaran a pensar seriamente en la reforma del Estado. Estarían obligados a pensar en los próximos cincuenta años, tendrían que relativizar la meta del año 2000 para poder asegurar la estabilidad política y económica del país. No habría ingobernabilidad porque todos tendrían manera de exigir responsabilidad y de asegurar su lugar en el proceso de discusión.

Es un escenario probable y el que más fácilmente podría des-trabar la transición democrática. Requiere de alguien que la dirija, podría ser el Presidente o bien algún líder de la Cámara de Diputados. Esto supone una gran responsabilidad en la próxima legislatura y obligaría a los partidos a ir pensando desde ahora en una verdadera agenda legislativa que pudiera convertirse en la generadora de un nuevo régimen.

Esta situación se puede dar con un alto nivel de participación, lo que fuera del DF se ve como poco probable por el ánimo de cansancio que alcanza a percibirse, o bien con un porcentaje de participación que a nivel nacional pudiera no rebasar el 50% nacional. Esto obligaría a los partidos a pensar en generar nuevas formas de participación política que voltearan a ver a la sociedad más allá de las estructuras partidarias.

Cuarto escenario: la debacle del PRI

El PRI pierde con un porcentaje de la votación que oscila entre el 25 y el 30%. Es un escenario poco probable y de cualquier manera podría obligar a que hubiera un proceso de transformación substancial del sistema. El curso que tomen las cosas dependería de quien tiene la mayoría en la Cámara, el PRD o el PAN. La nueva situación política que viviríamos los mexicanos, en un marco político así, no es insostenible, pero tiene ciertos riesgos conflictivos que no podemos eludir. Se trata de entenderlos para prevenir las posibles medidas que garanticen el éxito de la alternancia.

Entre los riesgos evidentes que conlleva el triunfo opositor en el gobierno del DF y la pérdida de la mayoría priísta en la Cámara de Diputados, está el posible endurecimiento autoritario del presidencialismo. Ello es posible, gracias a una Constitución que le otorga al primer mandatario poderes amplios y discrecionales en diversos ámbitos e instituciones, los cuales apenas se vislumbran en la intervención del Ejecutivo Federal en las campañas electorales, en la confección de programas de inversión pública con fines clientelares o en el manejo de la macroeconomía, a través de la política económica, que somete los indicadores de crecimiento del país al calendario de los comicios.

Otro riesgo es que los opositores no formen una nueva mayoría ni tengan una agenda legislativa común, coherente y previamente acordada. Frente a esa eventualidad, el partido del Presidente de la República puede derrotar al proyecto opositor, a través de un juego de alianzas de tipo parlamentario que evite distanciamientos o contrapesos entre el Ejecutivo y el Legislativo. Sin embargo, nos parece, el mayor riesgo de inestabilidad no provendría de la oposición sino del grado de resistencia que el PRI ejerza respecto a la llamada transición democrática.

El triunfo opositor en el DF y el cambio de mayoría en la Cámara de Diputados (en el tercer y cuarto escenarios) traerían consigo un elemento central para la democratización del país: *los inicios del fin de la impunidad*, la necesaria rendición de cuentas, el acoso a la corrupción; elementos que evidenciarían la debilidad

de uno de los puntales más amplios y extendidos del régimen actual.

Vicente Fox plantea en este sentido un debate muy importante sobre una de las condiciones para la persecución de los corruptos y la aclaración de los crímenes de Estado que tanto erosionan la vida interna del tricolor, y que suponen castigos, deslinde de responsabilidades. Fox habla de un "pacto de punto final", que sería un conjunto de ofertas hechas por la oposición al actual gobierno, en el sentido de la definición de varias franjas de reconciliación: la del perdón, la de amnistía, simbólicamente, la del armisticio.

Todas las transiciones democráticas han pasado por esa fase pactista, en la que se reconocen, de común acuerdo, los umbrales del perdón y de castigo; las cuotas de sacrificio que cada una de las partes otorga; los irreductibles que no son negociables. La oposición puede imponer una transición pactada, pero su tiempo y oportunidad no están claros para ese abigarrado conjunto que constituye a la oposición.

Según Fox, el temor del PRI al castigo y a rendir cuentas, aunado a la complejidad del fenómeno de la corrupción que se evidenció hasta en el Ejército y en instituciones antes intocadas, impiden el que la transición sea asegurada por el primer mandatario del país: Zedillo no entregaría el poder a la oposición porque las lealtades de su partido son condiciones irrenunciables para proteger al gobierno saliente. De ahí la necesidad de un pacto que evite revanchismos o posiciones principistas intransigentes por parte de la oposición.

¿Cuándo y como se pacta la transición? El derrotero que tomen esas negociaciones mucho depende de la madurez con que se planteen su tarea democratizadora los nuevos legisladores; sobretudo frente a las cloacas que destapan a través de las comisiones especializadas del Congreso de la Unión. No obstante, es claro que la definición más importante para lograr ese pacto serán las próximas elecciones presidenciales del año 2,000.

Tal pacto prefigura la necesidad ineludible de elaborar una agenda legislativa común entre quienes comparten objetivos parciales, que sea capaz de prever el juego de alianzas parlamentarias que se necesitarán en el Congreso para hacer aprobar las inicia-

tivas de ley y, antes de las votaciones, se necesita hacer, aunque sea reiterativo, un pacto de civilidad entre todos los contendientes para aceptar los resultados cualquiera que éstos sean. Avanzar en el equilibrio de poderes y servir de contrapesos que eliminen aquellos factores negativos del presidencialismo mexicano, requiere de una oposición inteligente y sensata que permita construir consensos que apuntalen una gobernabilidad democrática y una transición previamente pactada. Elementos que, evidentemente, también son vitales para gobernar una de las ciudades más grandes del mundo en un contexto de votación dividida.

JALISCO EN EL ESCENARIO NACIONAL

Jorge Alonso Sánchez

En Jalisco hay una importante recomposición de la estructura de poder regional, que ha tenido como componente una nueva instrumentalización de las relaciones políticas, una nueva institucionalización de las relaciones sociales, una nueva relación entre la región y el centro, una experiencia de pluralismo y un cambio en la forma de gobernar. Las elecciones federales de 1997 difícilmente cambiarán esta recomposición. Todo parece indicar que, en Jalisco, el PAN mantendrá el primer lugar en estas elecciones.

En 1995, al ganar un partido de oposición la gubernatura, los principales municipios y la mayoría en el Congreso, el anterior partido gobernante, el PRI, resintió la pérdida de ciertos controles, pero por el hecho de ser un partido de Estado a nivel nacional ha conservado estructuras de poder corporativas en el sindicalismo, en la burocracia, en los grupos de presión, en los medios de comunicación. Este partido cuenta con el apoyo del poder federal a través de muchas instancias federales ubicadas localmente y no pocos capitales importantes teniendo compromisos de carácter nacional mantienen nexos significativos con el poder central de dicho partido.

Otro obstáculo para el ejercicio democratizador ha sido el que las imbricaciones del narcotráfico con poderes políticos y militares a nivel nacional propician una lucha que se desarrolla en el territorio del nuevo gobierno regional, pero por encima de las capacidades y facultades del mismo. Esto favorece conflictos en un contexto de gran polarización.

El nuevo grupo gobernante tiene que enfrentar imprescindibles reformas administrativa y política. Para esto requiere lograr procesos de consensos. Se abre un nuevo campo político. Contra juicios simplificadoros, se opera un real cambio en la forma de gobernar. Muchos esfuerzos son consumidos en el combate a la

corrupción. La primera contradicción que enfrenta el nuevo gobierno es que la estructura vencida regionalmente del partido de Estado sigue operando a nivel nacional. También se genera una fricción en el nuevo partido gobernante. Antes estaban sólo los perseverantes en el ánimo opositor. Ahora se ha mostrado que es posible alcanzar puestos de poder por esta nueva vía y no pocos deseosos de conseguirlo se adaptan y presionan por este nuevo cauce. Hay grupos internos en pugna abierta por lograr hegemonía partidaria. No se acierta a hacer alianzas y a construir convergencias que respondan no a intereses faccionales sino a las necesidades ciudadanas. La tercera contradicción, y más importante, se da entre el nuevo equipo y una gran gama de ciudadanos. Estos, cansados de la anterior dominación, optaron por un cambio. Pero sus expectativas son del tamaño de su cansancio anterior. Lo que esperan que el gobierno resuelva es de gran dimensión. Dada la precariedad de recursos, los ensayos y los tropiezos de inexperiencias, lo que se llega a lograr a veces queda muy por abajo de la meta ilusionada. No obstante, la confianza otorgada a lo nuevo también suele ser muy grande. El reto es que no se dilapide. Todo eso produce una transición importante, pero bastante precaria. Esto por el difícil y necesario reacomodo en la correlación de fuerzas y la modificación del espacio público durante un lapso breve, pero ante muchas urgencias.

Un logro del nuevo Poder Ejecutivo es su respeto al Poder Legislativo. Aquí se muestran nuevos modos y estilos, que permiten que el Poder Legislativo opere como tal autónomamente. Un grave conflicto se ha dado entre el Ejecutivo y el Legislativo respecto al Poder Judicial. Este ha sido un reducto de poder poco confiable para un gran número de ciudadanos. Se defiende en una autonomía que quisiera como feudo intocable. La ciudadanía entiende que primero se tiene que limpiar dicho poder para que no utilice la autonomía como mecanismo de reproducción.

Otro logro del nuevo grupo gobernante es haber propiciado una reforma política integral fincada en un consenso entre los partidos con presencia en el Congreso. Lo más destacado ha sido lo relativo al Referéndum, Plebiscito e Iniciativa Popular. Son en verdad instrumentos de contrapesos de los poderes y arma de defensa de la ciudadanía. El defecto que ha existido en esto ha

sido que hasta ahora ha quedado como saber institucionalizado y no ha pasado hasta los niveles de los ciudadanos. Resta todavía la apertura de espacios no partidarios para la lucha política.

Teóricos de la democracia han insistido en que no es posible hablar de un verdadero cambio democrático mientras no se haya experimentado una real alternancia en la cúspide del poder formal: la Presidencia de la República. Pero mientras esto sucede, la alternancia puede ir ganando territorios. Esta será benéfica para todas las fuerzas políticas. Para las que estaban en el poder porque las obligará a aprender a ser oposición y para la oposición que haya triunfado porque le ofrecerá la oportunidad de enseñarse a gobernar. Probablemente este escenario, como en Jalisco, será cada día más frecuente en nuestro país. La democracia implica no sólo las tareas relativas al gobierno, sino que atañe a un modo de vida, a un mundo cotidiano de relaciones. Se ha erigido en un importante valor que impulsa a mucha gente a hacer sacrificios por conseguirlo. Existe una utopía concreta que es impulso para una continua ampliación, que se refiere a ese potencial liberador distinto al conjunto de ilusiones y mitologías que también se ha ido configurando en torno a la teorización de la democracia. La democracia tiene una carga simbólica fuerte. Habría que recalcar que una auténtica democracia no es factible sin una sociedad civil estructurada y sin una política integradora, pues la democracia debe objetivizar y subjetivizar la vida pública y supone un marco institucional capaz de permitir la expresión de formas novedosas. Hay que profundizar en esta importante temática de la democracia. Siempre será benéfico desentrañar las experiencias pioneras.

BIBLIOGRAFÍA GENERAL

- ALONSO, Jorge, *El cambio en Jalisco. Las elecciones de 1994 y 1995*, CEEJ-Ciesas-CUCSH, Guadalajara, 1996.
- , “Comentarios al Segundo Informe Presidencial”, en Enrique Valencia Lomelí (Coord.), *A dos años: la política social de Ernesto Zedillo*, Red Observatorio Social, Guadalajara, 1997, págs. 33-42.
- AZIZ NASSIF, Alberto, *Territorios de alternancia. El primer gobierno de oposición en Chihuahua*, Ciesas-Triana, México, 1996.
- , “Un país atribulado” en Enrique Valencia Lomelí (Coord.), *A dos años: la política social de Ernesto Zedillo*, Red Observatorio Social, Guadalajara, 1997, págs. 17-31.
- ARROYO PICARD, Alberto, “Economía mexicana en 1996: ¿una nueva etapa postcrisis?” en Enrique Valencia Lomelí (Coord.), *A dos años: la política social de Ernesto Zedillo*, Red Observatorio Social, Guadalajara, 1997, págs.59-94.
- CALVA , José Luis, “Perspectivas económicas para 1997” en *Carta Económica Regional*, No. 51, noviembre-diciembre 1996, Guadalajara, págs. 3-11.
- PRECIADO CORONADO, Jaime A., “Combate a la pobreza en México: una geografía de la exclusión” Carlos Barba Solano y Enrique Valencia Lomelí (Coords.), *El debate nacional: la política social*, Tomo 5, UANL-UDEG-UNAM, en prensa.
- ROMÁN MORALES, Luis Ignacio, “El desempleo y el subempleo ante el modelo económico y la política social” en Carlos Barba Solano y Enrique Valencia Lomelí (Coords.), *El debate nacional: la política social*, Tomo 5, UANL-UDEG-UNAM, en prensa.
- VALENCIA LOMELÍ, Enrique, “El salario mínimo: ¿un indicador prescindible?” en Enrique Valencia Lomelí (Coord.), *A dos años: la política social de Ernesto Zedillo*, Red Observatorio Social, Guadalajara, 1997, págs. 117-143.

Las Elecciones de 1997: ¿Transición o Restauración?
se terminó de imprimir el mes de junio de 1997,
se utilizó la fuente times en: 12, 11, 10.5 y 9 pts.
La edición consta de 500 ejemplares



AMAROMA EDICIONES

Av. Vallarta 1835-2, 44140 Tel/Fax 616 53 43 - 616 53 46

